



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Expediente N° 1990/2024

**AUTOS: CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA c/
MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
s/IMPUGNACION DE DEUDA**

VISTO Y CONSIDERANDO:

Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA contra la resolución dictada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social N° RESOL-2023-40195-APN-DRLF#MT que desestima el recurso de impugnación interpuesto contra el acto administrativo dictado en el expediente N° 7-51-111738-2016, RESOL-2023-28692-APN-DRLF#MPYT, que le impone una multa de \$17.248,80.-, por la infracción cometida al artículo agregado sin número a continuación del art. 40 de la ley 11.683.

La parte actora se queja de la resolución. Se agravia por cuanto desconoce el derecho aplicable e invierte la carga de la prueba, poniéndola a cargo de su instituyente. Expresa que es errónea la interpretación del Ministerio de Trabajo con respecto a un empleo encubierto o pseudo cooperativa, en relación de su parte, sin haber realizado medios de prueba y desconociendo la tarea del instituto específico que regula a las cooperativas. Expresa que la cooperativa de trabajo está legalmente constituida y que acredita los instrumentos que demuestran su calidad de tal, su estatuto social y constancias de su aprobación.

Desde el punto de vista procesal corresponde el análisis del recurso interpuesto pues por imposición del art. 44 de la ley 27.742, que modificó la anterior ley 19.549, el cumplimiento de una sanción pecuniaria no podrá ser exigido como requisito de admisibilidad del recurso judicial.

En cuanto al fondo del tema sometido a juicio, cabe destacar que las cooperativas de producción o trabajo son asociaciones de personas que se unen para producir bienes o prestar servicios y cuyo objetivo es mejorar sus condiciones económicas, sociales y culturales.

Fecha de firma: 29/09/2025

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE MARIA SANCHEZ MOSCOSO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#38661415#462593305#20250922120949000

Se caracterizan por proteger la autogestión y la conducción democrática de la administración de la asociación y su finalidad es proporcionarles trabajo a sus asociados , los que reciben una parte de los excedentes que genera la cooperativa siempre en proporción al trabajo realizado por cada uno.

En otras palabras, la actividad de dichas entidades es económica como la de cualquier otra asociación productiva pero, desde el punto de vista histórico, exceden dicho objetivo dado que, al estar formadas por trabajadores, también pretenden elevar las condiciones socioeconómicas de éstos.

La idea que mueve a dichas entidades es reemplazar la figura del trabajador asalariado por el socio cooperativista, dueño del capital y del trabajo, inserto en una organización horizontal, igualitaria y solidaria. Se ha señalado que las citadas asociaciones se originan en el propósito de evitar la explotación del trabajo manual o intelectual del hombre. Su objetivo no es favorecer sino suprimir, en lo posible, el trabajo asalariado, para sustituirlo por el trabajo en común, mediante una aportación libre del trabajo de todos –técnicos, empleados y obreros- contribuyendo de tal manera a la obtención de beneficios en los que participantes exclusivamente los que conjugan sus aptitudes y realizaciones, volcándolas a favor de la entidad. No se concibe, pues, la cooperativa de trabajo como una sociedad cerrada que instituya privilegios o reconocimiento de discriminación de cualquier tipo. No se la concibe tampoco guiada por un primordial espíritu de lucro, consagrada a la acumulación de capitales e intereses o gobernada por núcleos excluyentes, al modo de una empresa comercial que loca sin restricciones el trabajo de los individuos, allegándolos en relación de dependencia (ver CSJN, 24/11/09, “Lago c/Cooperativa Nueva Salvia Ltda”, Fallos 332:2614).

Es por ello que, en principio, se entiende que en una cooperativa de trabajo genuina, la calidad de socio excluye a la del trabajador dependiente lo que determinaría la inaplicabilidad de las disposiciones del art. 27 de la LCT (Rubio y Piatti, “Recursos de la seguridad social”, p. 231; Capón Filas, Rodolfo, “Derecho del”, ps 203/4; CNTr. Sala I, 20//01, “Mendoza c/Coop. de Trabajo Patagónica”, DT 2001-B-2109; Sala III, 22/7/01, “Guerrero c/Castellini”, DT 2002-508; Sala V, 28/12/01, “García c/Coop, de Lince”, LL 2002-D-275; Sala VI, 13/10/10, “Di Gregorio c/Coop. Trabajo de Cazadores Ltda.”, DT 2.011-9-2325”) pero las citadas cooperativas resultan entes permeables a situaciones de fraude laboral y con frecuencia se enmascaran bajo su estructura social, típicas prestaciones de carácter dependiente. Se ha entendido que si la cooperativa de trabajo actúa como simple proveedora de mano de obra en beneficio de terceros resulta alcanzada por la legislación laboral (ver Caubet, Amanda “Las cooperativas de trabajo. Un instrumento de fraude a la ley”, DLP 1999-XIII-85; CSJN, 10/10/17, “Pessina c/Luis Frisman y otros”, Fallos: 340:1414; CFSS., Sala II, 28/8/19, “Primer Corte Coop. de Trabajo Ltda c/AFIP”).

Lo anterior explica que el Poder Ejecutivo haya sancionado el decreto 2.015/94 cuyas directivas vedan la posibilidad de que las cooperativas de trabajo, para el cumplimiento de su objeto social, provean la contratación de los servicios cooperativos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados. Por otra parte, no cabe olvidar que, en el campo del derecho social, rige el principio de primacía de la realidad puesto que el contrato de trabajo es un contrato realidad fundado en los hechos objetivos apreciables y, en caso de discordancia, debe darse preferencia a los hechos que fija la base fáctica de aplicación del derecho y no a lo expresado en los instrumentos suscriptos por las partes (Pla Rodríguez, “Los principios del derecho del trabajo”, p. 313; García Martínez, “Derecho del trabajo y de la seguridad sociales”, pág.295).

En el caso a estudio, según resultado del estudio de las constancias administrativas acompañadas, se atribuyó la condición de trabajador del Señor Chavez Ceferino.

Que, al producir descargo en la instrucción sumarial del expediente 2024 -00707835- -APN-DGD#MT la empresa relevada, como prueba sus dichos, acompaña copia de inscripción del asociado relevado como así también el pago de aportes del mes correspondiente.

A su vez, también adjunte testimonio del estatuto social inscripto en INAES, copia del libro de registro de asociados donde consta registrado el Sr. Chavez, carta documento de aceptación del asociado a la entidad, comprobante de pago de aportes del asociado, copia de certificado de ANAES, declaración jurada del asociado, anticipo de retornos, convocatoria a asamblea suscripta por el asociado, constancia de asistencia a asamblea del asociado, política de seguro resolución INAES, entre otras pruebas. en apoyo de su postura.

Planteada así la cuestión y habiéndose constatado que la apelante es una entidad legalmente inscripta, en los términos del régimen de cooperativas, entendiendo que lo resuelto debe ser dejado sin efecto ya que la presunción del art. 12 de la ley 19.549 (sustituido por el art. 33 de la ley 27.742) puede ser alterada por prueba contrario, y el hecho de que, durante el curso de la inspección, el Señor Chavez no se identifica como socio de la cooperativa constituye un dato insuficiente como para justificar una condena punitiva. Ello atento a que es deber del Estado llegar a la verdad material de los hechos acaecidos y ejercitar con prudencia sus facultades sancionatorias a los fines de no violentar el art. 17 de nuestra Carta Magna.

En mérito de lo que resulta del presente acuerdo, el Tribunal **RESUELVE:** 1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, 2º) Dejar sin efecto la sanción patrimonial aplicada, 3º) Sin costas por no haber mediado contradictorio.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA

Juez de Cámara Subrogante



JUAN FANTINI ALBARENQUE

Juez de Cámara

ANTE MÍ: SANCHEZ MOSCOSO JOSE MARIA

Prosecretario de Cámara

AFA

